

POLITIZACIÓN Y POLARIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL VENEZOLANA:

LAS DOS CARAS FRENTE A LA DEMOCRACIA

**Politization and Polarization of Venezuelan Civil Society:
Facing Democracy with two Faces**

**María Pilar García-Guadilla
Universidad Simón Bolívar, Venezuela**

**Prepared for delivery at the XXIV International Congress (2003 meeting) of
the Latin American Studies Association, Dallas, Texas, March 27-29, 2003**

Politización y polarización de la sociedad civil venezolana: las dos caras frente a la democracia

María Pilar García-Guadilla *

1. *¿Consolidación o desconsolidación de la democracia en Venezuela?:*

Durante el periodo de 1958-1989, en Venezuela las diferencias de clase, etnia y género que se encontraban sumergidas fueron minimizadas por la literatura política al considerarse al país, junto con Colombia, Costa Rica y en algunos casos México, como un caso de excepcionalidad democrática en la Región. Esta percepción política contradecía la realidad e incluso el marco jurídico existente ya que al igual que en otros países de América Latina, en Venezuela no sólo existían diferencias entre grupos socioeconómicos, étnicos y de género sino que en algunos casos, estas diferencias estaban sancionadas jurídicamente en códigos civiles y penales y en leyes orgánicas como la del trabajo. Estudiosos de la realidad venezolana como Naím y Piñango (1984) destacaban la existencia de clases sociales pero no reconocían la “lucha de clases”; se aceptaba la existencia de diferencias étnicas incluyendo el origen indígena de parte de la población venezolana siempre y cuando ésta se integrara a la “cultura de Venezuela” cuyas raíces indígenas no solo estaban minimizadas sino que eran rechazadas. Por otro lado, no se reconocía plenamente la igualdad jurídica ni social de la población indígena pues a ésta junto con los niños se le consideraba como menor de edad y por tanto, estaba sometida a la protección del Estado¹.

Una de las hipótesis que los politólogos han manejado es que la democracia “vitrina” que Venezuela inauguró en 1958 con la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez se resintió o inviabilizó con la aguda crisis económica social y política de las últimas dos décadas. Una tesis más optimista que defenderemos en este trabajo es que éstas crisis hicieron manifiesta la insuficiencia de la democracia representativa para lidiar con los problemas de las desigualdades étnicas, de género y sobre todo socioeconómicas. Además, las crisis presionaron por la apertura del sistema político de forma de incorporar las

* Socióloga Urbana y Politóloga. Doctorado en Ecología Humana y en Planificación Urbana de la Universidad de Chicago. Profesora Titular e Investigadora del Departamento de Planificación Urbana y del Postgrado en Ciencias Políticas. Coordinadora del Laboratorio y Grupo de Investigación Interdisciplinario en Gestión Ambiental, Urbana y Socio-Política (GAU). Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela.Email: mpgarcia@usb.ve

¹ Una de las mayores contradicciones entre el discurso, la realidad y el marco jurídico lo constituyó las diferencias de género: el discurso oficial de la estrenada democracia de los sesentas promovía la igualdad de derechos entre hombres y mujeres pero discriminaba a éstas últimas bien sea jurídicamente estableciendo diferencias en los Códigos Civil y Penal, o con leyes especiales como La Ley del Trabajo CUYO OBJETIVO ERA amparar a la mujer en su condición femenina.

demandas de la población por la profundización de la democracia mediante una mayor participación y, dados los altos índices de pobreza y desigualdad existentes, estas demandas también fueron por una mayor equidad social. Como consecuencia de lo anterior: a) las diferencias de clase han tendido a transformarse en diferencias políticas haciendo que la demarcación entre los actores sociales, económicos y políticos sea cada vez más tenue y que constantemente los diferentes actores transpasen sus líneas identitarias; b) los conflictos de carácter político se han impregnado con contenidos de clase derivando en conflictos socio-políticos que enfrentan a las clases sociales de forma polarizada lo que hace más difícil su solución dentro de un contexto democrático.

La crisis económica de los ochenta contribuyó a activar la grave crisis política que tuvo una de las expresiones más relevantes en 1989 con el Caracazo e hizo aflorar con fuerza dichas contradicciones y diferencias. Mucho se ha escrito sobre el potencial democratizador y el rol que jugaron los movimientos y organizaciones sociales en Venezuela a lo largo de los últimos treinta años (García-Guadilla, 1994, 1997, 1999, 2002, 2002c; Gómez Calcaño, 1987, 1997). De hecho, la descentralización política iniciada por decreto presidencial con la creación de la Comisión de Reforma del Estado (COPRE) en los ochenta, y expresada en las leyes orgánicas de descentralización, electorales y del régimen municipal aprobadas en 1989 fueron motorizadas por las movilizaciones de los movimientos y organizaciones ciudadanas, populares y cooperativos entre otras (Silva, 1999). Mas aún, la extensión y/o inclusión en la Constitución de 1999 de nuevos derechos humanos, ambientales, indígenas, de género y sociales guarda una estrecha relación con la movilización y estrategias desplegadas por los movimientos y organizaciones sociales a lo largo del Proceso Constituyente e incluso en periodos previos (García-Guadilla 2002, García-Guadilla y Hurtado, 2000).

La Constitución del 1999 incluyó los derechos de muchos de los actores excluidos del Pacto de Punto Fijo tales como los indígenas, los pobres, las mujeres y los extranjeros nacionalizados entre otros y reconoció de manera fehaciente que todos los ciudadanos/as sin distinción de clase, raza, religión o género tienen los mismos derechos. Mas aún, fueron estos actores, originalmente excluidos de los pactos políticos con el Estado, quienes mayormente presionaron al sistema político para que éste se democratizara más allá de la práctica electoral e incluyera sus demandas y derechos. A pesar del reconocimiento constitucional de los nuevos derechos y de los actores y organizaciones que los propiciaron, es preciso destacar las dificultades crecientes que existen para resolver los conflictos Estado-Mercado-Sociedad que han surgido dentro del nuevo marco constitucional.

Una de las razones que serán exploradas en este trabajo es que dadas las deficiencias en la cultura política democrática del venezolano, el nuevo marco constitucional no ha podido contrarrestar las percepciones sobre “el otro” e incluso las auto-percepciones que derivan de las diferencias socioeconómicas, étnicas y de género y que dentro de un escenario de grandes desigualdades sociales

parecen haber aflorado con mayor intensidad. Esta hipótesis no descalifica el rol que haya podido jugar el “encendido y polarizado” discurso Presidencial en la intensificación de los conflictos de clase al equiparar diferencias sociales con división política. En la medida que los niveles de pobreza y desigualdad se han acentuado, la democracia en Venezuela al igual que en otros países de la Región, no ha podido evitar que las diferencias de clase se transformaran en lucha de clases y tendieran a equipararse con diferencias político-ideológicas.

Tomando como escenario el marco anterior, otra de las hipótesis desarrolladas en este capítulo es que la aguda crisis que experimenta el sistema político venezolano desde 1989 como resultado de la grave crisis económica y social, debe ser interpretada no sólo como un obstáculo que pudiera contribuir a la desconsolidación de la democracia sino también como una oportunidad para la profundización de la misma. En Venezuela, las tensiones democracia-antidemocracia provienen tanto del Estado como de la sociedad organizada y del resultado de esta interacción; es decir de la forma democrática o no cómo se manejen las percepciones, los conflictos y las tensiones entre ambas partes, dependerá la consolidación o la desconsolidación de la democracia en Venezuela².

2. Organizaciones sociales y conflictos sociopolíticos: ¿ dos caras frente a la democracia?

A lo largo del decenio 1989-1999, las movilizaciones y luchas de los movimientos y organizaciones sociales para que los derechos que demandaban se incluyeran en la nueva constitución y una vez incluidos, se reconocieran como la base de su interrelación con el Estado contribuyeron al fortalecimiento de la democracia³ (García-Guadilla y Roa, 1996; García-Guadilla 2002). Sin embargo, la inclusión de estos derechos no garantizó que el Estado y la sociedad tuvieran la misma interpretación del texto constitucional a la hora de un conflicto entre derechos constitucionalizados. Por tanto, la defensa por los derechos constitucionales sancionados movilizó a amplios sectores de la población durante el bienio 2000-2002 independientemente de su nivel socioeconómico y tendencia política (García-Guadilla, 2001; García-Guadilla, 2002, 2002c)⁴.

² La noción empírica de sociedad organizada que se utiliza en este trabajo incluye tanto a las asociaciones y organizaciones políticas, término usado en la Constitución de 1999 para referirse a los partidos políticos, como las sociales. No obstante, dado el protagonismo que este último tipo de organizaciones ha jugado en los conflictos surgidos con el Estado y dado que dichos conflictos deben resolverse bajo el nuevo marco constitucional, este trabajo se focalizará fundamentalmente en el rol democratizador o no que jugaron *las organizaciones sociales* a lo largo de los conflictos.

³ El presente análisis se basa en: a) la revisión exhaustiva del material hemerográfico correspondiente, b) el análisis de contenido de los documentos de las organizaciones sociales, c) los resultados de las entrevistas a las organizaciones sociales y, d) los testimonios aportados sobre las experiencias o estudios de caso del 23 de enero y el 2 de febrero del 2003.

⁴ Ambos sectores, los adeptos a Chávez y quienes lo adversan, tienden a utilizar el marco constitucional como legitimación de sus demandas y movilizaciones.

Entre los sectores más movilizados se encuentra la “oposición política” la cual puede definirse como una categoría sumamente amplia, heterogénea ideológicamente y diversa en sus identidades e intereses que alberga a todos los descontentos con el Presidente Chávez. Además de las organizaciones sociales que se oponen a Chávez, incluye a las amas de casa predominantemente de las clases media y alta, gran parte de los jóvenes de clase media y/o alta, a los partidos políticos de la oposición con diversas ideologías y a las organizaciones corporativistas como la Federación de Cámaras de Industriales y Comerciantes (Fedecámaras) y la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV)⁵.

La oposición como actor político ha tendido a identificarse con la Coordinadora Democrática de Acción Cívica (CACIV) cuyo documento constitutivo data de enero del 2001 y su presentación ante los medios fué el 15 de marzo del 2001. La Coordinadora Democrática se autodefine como “un movimiento democrático y pluralista, destinado a canalizar esfuerzos de diversos grupos e individualidades de la sociedad civil, respetando la autonomía y la independencia de cada uno, con la finalidad de defender el sistema democrático, el estado de derecho, las libertades individuales y la estabilidad institucional”. Mas aún, aspira a convertirse “en un punto de apoyo para la oposición democrática, y en una referencia válida, sólida y coherente con credibilidad y alcance dentro del entorno político nacional e internacional y actuar como ente vigilante del Estado, sin pretender convertirse en un partido político ni en plataforma electoral. CACIV activará sus mecanismos de acción cada vez que la estabilidad democrática sea amenazada por prácticas de carácter totalitario” (www.geocities.com/caciv_ve/)⁶.

Según la dirigencia del Bloque Democrático (www.elnacional.com), organización que en la actualidad forma parte del CACIV y quien recientemente ha criticado las decisiones y estrategias utilizadas por la Coordinadora con motivo del paro cívico que duró dos meses (del 2/12/2002 al 2/2/2003, la Coordinadora debe estar compuesta por todos los sectores de la oposición los cuales comprenden: a) los partidos políticos, nuevos y tradicionales, “con comprobada trayectoria ciudadana”; b) instituciones de la sociedad, como los medios de comunicación, la CTV, Fedecámaras, el sector petrolero, los marinos mercantes y los militares disidentes; c) una cuota de las gobernaciones y las alcaldías, y d) las organizaciones no gubernamentales de “verdadera esencia”⁷.

⁵ Entre los partidos políticos se encuentra Acción Democrática, Copei, La Causa R, Primero es Justicia e incluso, partidos que en el pasado estuvieron contra la democracia como Bandera Roja. La heterogeneidad ideológica es relativamente alta también entre las organizaciones sociales de la oposición aún cuando la mayoría defiende la democracia “liberal”.

⁶ La CACIV es sumamente heterogénea ideológicamente y el único consenso explicitado ha sido “salir de Chávez”. Entre los veintinueve miembros fundadores es decir las instituciones o las personas jurídicas afiliadas, se encuentran el Foro Democrático, el Frente Institucional, Frente Ezequiel Zamora y el Comité de Resistencia Civil, fundaciones y organizaciones como La Fundación Democracia & Libertad Venezolana-Americana, el Movimiento Vecinal Con La Vida Democrática, la Junta Patriótica, Pro Catia, Visión Emergente e incluso el Partido Popular Independiente y el Movimiento de Integridad Nacional (MIN).

⁷ Nótese que se habla de partidos políticos “de comprobada trayectoria ciudadana” y de organizaciones no gubernamentales de “verdadera esencia”, acepciones que no están claramente definidas lo

Es preciso destacar que de acuerdo con la clasificación anterior las organizaciones sociales o no gubernamentales constituyen apenas uno de los componentes de la alianza contra Chávez⁸. Además, dado el orden en que aparecen en la definición de oposición política (de último), su poca visibilidad mediática a lo largo del paro cívico y el hecho que los partidos políticos y sobre todo las denominadas “instituciones” como la CTV, Fedecámaras y el sector petrolero, hayan copado el liderazgo y el espacio político de la Coordinadora, ha dejado a estas organizaciones prácticamente al margen de la Mesa de Negociación y Acuerdos que se creó para resolver los conflictos entre el Estado y la oposición. Sin embargo, a juzgar por las intensas movilizaciones ciudadanas y otras acciones de impacto como la recolección de firmas para el referendun consultivo y el revocatorio en que participaron, dichas organizaciones jugaron un papel protagónico en estos conflictos.

Dada la definición constitucional de la democracia venezolana como “participativa y protagónica”, una de las razones que ocasionó el enfrentamiento entre el Ejecutivo y la oposición fue el derecho a participar en la elaboración del marco legal o leyes orgánicas que debían desprenderse de la Constitución. El conflicto se inició con la aprobación mediante decreto presidencial del paquete de leyes “habilitante” lo cual frustró la expectativa creada por la Constitución de 1999 de que dichas leyes se aprobarían por vía de la democracia participativa; además, se nutrió con la aprobación de políticas y otras medidas que, en opinión de la oposición, le perjudicaba ampliamente.

Entre las propuestas que respaldó la oposición para salir de la grave crisis política que originó tal aprobación estuvo el llamado a activar las figuras de la democracia participativa presentes en la Constitución de 1999 tales como los referenda consultivo y revocatorio, la enmienda constitucional y un nuevo proceso constituyente. En esta oportunidad, la organización ciudadana SUMATE⁹ activó la campaña para la recolección de las firmas cuya expresión más relevante tuvo lugar con motivo del “Firmazo” o jornada cívica ciudadana del 2 de febrero del 2003 donde se recogieron cuatro millones y medio de firmas lo que representa el 37.5% de los doce millones de votantes¹⁰. Este proceso de recolección de firmas así como el proceso previo de recolección de más de dos millones y medio de firmas (más del 10% que requiere la Constitución) por parte de las organizaciones

que pudiera a que aquellas organizaciones que por definirse como sociales y mantener su autonomía, no caen en el juego de la polarización política, queden excluidas.

⁸ El formar parte de la CACIV, organización de carácter eminentemente político, pudiera considerarse como una transgresión de roles por parte de las organizaciones sociales así como también las movilizaciones y otras acciones como el Paro Cívico a las que convocaron estas organizaciones con el objetivo explícito de “sacar a Chávez ya”; en contraste, las movilizaciones por el Referendun Consultivo o Revocatorio y las acciones de recolección de firmas están de acuerdo con sus objetivos y roles.

⁹ SUMATE fue fundada a fines del 2002 con una alta disponibilidad de recursos que provienen principalmente del sector privado; se autodefine como una cooperativa de investigadores y abogados, que se encarga “de concentrar, codificar, organizar y transcribir las firmas captadas por la oposición” SUMATE.

¹⁰ Este 37.5% está por encima del 20% que requiere la Constitución para convocar al Referendun Revocatorio.

sociales ciudadanas (Queremos Elegir y Primero Justicia entre otras) y su entrega el 4 de noviembre del 2002 al Consejo Nacional Electoral (CNE) para activar el referendun consultivo, constituyen ejemplos de la cara democrática y propositiva de las movilizaciones ciudadanas de la oposición. Es preciso destacar que a pesar de su desdibujamiento al interior de la CACIV, en ambos casos, el liderazgo y la organización de estos procesos estuvo en manos de las organizaciones sociales y que estos procesos contribuyeron a robustecer la cultura política democrática¹¹.

Contrastando con lo anterior, en la defensa de los nuevos derechos constitucionales, las organizaciones sociales (electorales, vecinales y de mujeres por ejemplo), los partidos políticos y en general, la oposición han mostrado una faceta menos democrática. Esta cara antidemocrática de la oposición se manifestó en algunas de las estrategias utilizadas para defender derechos paradójicamente “democráticos” tales como la propiedad privada, los cuales se consideraban amenazados. Dichas prácticas, que develan la deficiente cultura política democrática del venezolano, se basaron en el miedo al “otro” considerado “el enemigo” y por tanto en su exclusión del campo de la negociación política. Un ejemplo de prácticas antidemocráticas lo constituye la instrumentación de los “Planes de Contingencia” del 23 de enero del 2003 que tenían el supuesto objetivo de defenderse frente a “las hordas chavistas”. En esta oportunidad, el lenguaje peyorativo y el imaginario de la oposición estuvieron alimentados por los constantes rumores y llamados de los medios de comunicación privados reiterando que “los círculos bolivarianos” atacarían violentamente el sagrado recinto de la propiedad privada de la clase media¹².

Esta segunda cara antidemocrática puede aplicarse tanto a la oposición como a los adeptos a Chávez aun cuando será analizada solo desde el lado de la oposición. Se manifiesta en lo que Tulio Hernández al hablar de la “gramática de guerra” que priva en Caracas, ha denominado el secuestro de los lugares públicos de la ciudad por un grupo político, ya sea del Gobierno o de la oposición. (El Nacional 9/3/2003 pág. A/13).

Pero, ¿cómo se llegó a estas prácticas?. Mucho se ha elaborado acerca del rol democrático de las organizaciones sociales ciudadanas y muy poco sobre esta segunda faceta. Es por ello que un tercer objetivo de este trabajo es el de develar las prácticas antidemocráticas “de exclusión y negación del otro” que pueden surgir de los actores sociales cuando el texto constitucional es interpretado de forma diferente por el Estado o cuando estos actores sociales se sienten frustrados en sus expectativas algunas de las cuales transvasan las identidades de dichas organizaciones y se transforman en expectativas de clase¹³. El análisis

¹¹ Dos condiciones parecen ser necesarias para robustecer la democracia y el ejercicio de las nuevas ciudadanía: a) una cultura cívica que se expresa en la movilización activa de las organizaciones sociales autónomas en defensa de estos derechos y, b) la existencia de una sólida cultura política democrática.

¹² Para una breve descripción de los Círculos Bolivarianos, ver García-Guadilla (2002c).

¹³ Es preciso destacar que estas prácticas antidemocráticas no pueden ser atribuidas exclusivamente a las organizaciones sociales, partidos políticos o individuos que forman parte del variopinto mapa de la

de estas prácticas se torna relevante al constatar que quienes las realizan son los mismos actores que en el pasado se movilizaron para que el espacio político se abriera y albergara sus demandas; son los mismos que en la actualidad se moviliaron por el “firmazo”. Ello lleva a especular acerca del rol, democrático o no, que las organizaciones sociales pudieran tener en el futuro escenario político venezolano¹⁴.

3. Ciudadanías del miedo, imaginarios de clase y polarización social

Muchas de las prácticas antidemocráticas, de intolerancia y excluyentes llevadas a cabo por la oposición en general y de forma específica por las organizaciones sociales se fundamentan en imaginarios sociales que se encuentran reforzados por la elevada polarización social resultante de los altos índices de pobreza así como también por la polarización política frente al gobierno del Presidente Chávez. Estos imaginarios sirven de justificación a las acciones de exclusión espacial y social del “otro”. Por tanto, un cuarto objetivo de este trabajo es analizar los efectos espaciales, sociales y políticos de estos imaginarios y de la creciente polarización socio-política de la sociedad venezolana en la última década.

Los hechos que a continuación relatamos son reales y de data reciente aún cuando tengan similitud con algunas de las crónicas de las ciudades sitiadas de la Edad Media, de los ghettos judíos de la Segunda Guerra Mundial o del desaparecido, al menos legalmente, ghetto surafricano. Forman parte de la cotidianidad e incluso de la historia de la ciudad capital de Caracas donde la protesta política y la lucha por la democracia se han territorializado o expresado en los espacios públicos y privados desde fines de los años ochenta más que en las urnas o a través de la vía electoral. En Caracas, las diferencias políticas y sociales, el miedo, el desánimo y la frustración política han estimulado el secuestro de los espacios públicos de la ciudad además de fuertes procesos de segregación espacial y de polarización social; en suma la desdemocratización de la ciudad.

Es a través de estos procesos segregación y polarización donde se expresa la faceta antidemocrática de organizaciones sociales como las asociaciones ciudadanas de clase media que en el pasado hegemonizaron la lucha por la democracia participativa. Al sentirse amenazadas por el enemigo, el “otro”, estas organizaciones sociales han priorizado sus intereses de clase en las respuestas dadas a la crisis y han utilizado estrategias cuasi-militares para defender los espacios privados del hogar o residencia familiar, el edificio o condominio y la

oposición pues se observan igualmente entre las organizaciones sociales, partidos e individuos adeptos al gobierno.

¹⁴ Dadas las semejanzas que existen entre la experiencia venezolana y la chilena, no debemos olvidarnos del rol jugado por la oposición en la caída de Allende lo que apuntaría hacia la falta de excepcionalidad del caso venezolano.

urbanización en que habitan; en sus palabras, “defender la familia, la propiedad y la democracia” así fuera mediante planes y estrategias violentas, excluyentes y antidemocráticas. Para ello, se han apoyado en organizaciones pre-existentes como el condominio de vecinos a nivel de edificación o en las asociaciones de vecinos a nivel de la urbanización, ambas figuras sancionadas en el Reglamento de Participación Ciudadana de la Ley Orgánica del Régimen Municipal de 1989¹⁵.

Haremos este análisis tal como lo recomienda Michel De Certeau (1984), acercándonos al espacio de la ciudad de Caracas como el escenario donde interactúan nuestros personajes. Estos están tipificados por un lado, por el Estado¹⁶ representado por el Presidente Chávez dado el alto personalismo existente y por el otro lado, por las organizaciones sociales de la oposición que han sido identificadas de forma estereotipada por los medios de comunicación adversos a Chávez, con el eje de “la sociedad civil” en esta contienda¹⁷

En febrero de 1989, la protesta política en la ciudad de Caracas contra las medidas de ajuste estructural adoptadas por el entonces Presidente Carlos Andrés Pérez, dió curso a una explosión social de grandes dimensiones denominada “Caracazo” (García-Guadilla, 1991). Este evento marca el inicio del miedo al “otro”; cuyo referente es el pobre o las “turbas desorganizadas” como las llamaron los medios de comunicación, que en esa oportunidad “bajaron los cerros” donde habitan para satisfacer su hambre de comida y de los artículos de consumo suntuario que les estaban negados, atemorizando con esta conducta a la clase media¹⁸. Según las encuestas de opinión pública realizadas recientemente, el

¹⁵ El planteamiento sobre la faceta antidemocrática de las organizaciones ciudadanas de corte liberal se encuentra subyacente en los artículos de Lander (1985), García-Guadilla y Roa (1997) y García-Guadilla y Silva (1999), García-Guadilla (2002b).

¹⁶ Es preciso destacar que las organizaciones sociales chavistas identificadas con Los Círculos Bolivarianos forman parte también de los conflictos; se identifican con el Estado, concretamente con el Presidente Chávez; y están en permanente confrontación con la oposición. A pesar de su rol, dada su complejidad y la naturaleza de este trabajo, solo serán analizadas en la medida que sus comportamientos y acciones generen una respuesta de parte los grupos opositores a Chávez.

¹⁷ La vanguardia de la “oposición venezolana” que estuvo activa a lo largo del año 2002, definida según el periodista García Mora (El Nacional, 23 /2/2003) por su poder de convocatoria, protagonismo, cantidad de personas que la componen y cantidad de gente que pueden movilizar, está formada en primer lugar por Fedecámaras, los empresarios, los medios (directores y periodistas), la CTV, la Gente del Petróleo, los militares de Altamira y la Iglesia (que se retiró después de los eventos del 11 de abril). A la base social inicial que es la clase media que marcha y “cacerolea” se le han incorporado algunos sectores populares. También forman parte de este grupo de vanguardia personalidades que según las encuestas mueven a la opinión pública como los gobernadores y ex gobernadores Enrique Mendoza, Enrique Salas Romer, Guillermo Lapi, Manuel Rosales y Enrique Salas Feo junto con el alcalde metropolitano Alfredo Peña y el diputado a la Asamblea Nacional por Primero es Justicia, Julio Borges. No debe dejarse de lado a las nuevas organizaciones no gubernamentales (ONGs) como Ciudadanía Activa o refrescadas como Queremos Elegir y sus líderes tales como Santana, Carvajal, Pizanni, Vladimiro Mujica y Vilma Petrash ni a los partidos políticos a pesar que estos “últimos tienen muy poca capacidad de reactivar y convocar. Es preciso destacar las discrepancias que existen entre este heterogéneo grupo donde el único consenso parece ser “salir de Chávez”.

¹⁸ En esta ocasión y a pesar que la mayoría de los bienes saqueados durante el Caracazo pertenecían a la clase alta y media, los pobres del cerro no se enfrentaron directamente con la clase media y alta. El enfrentamiento

imaginario social venezolano de la clase media y alta representa al pobre como “un criminal y un delincuente” y a los círculos bolivarianos que supuestamente agrupan a los adeptos al Presidente Chávez, como “violentos y terroristas”¹⁹. A su vez, el pobre percibe a la clase media y alta también como “delincuente, corrupta y explotadora”; en sus propias palabras, la clase media y alta son los “escuálidos oligarcas”. En el artículo periodístico²⁰, “Polarización forzaré fin de la crisis” (El Universal, Domingo 22 de diciembre del 2002, pp. 1-9), Andy Webb-Vidal destaca la respuesta dada por una persona que opera una estación de radio afecta al gobierno de Chávez quien señala: “Los de Altamira nos describen como agresivos y peligrosos, pero no quieren escucharnos. Nos ven como una amenaza, pero es lo contrario” (pp. 1-9). Webb-Vidal destaca también que según los resultados de las encuestas realizadas por los medios de comunicación, existen espacios percibidos como impenetrables según la clase social que son la consecuencia de visiones polarizadas de los espacios de la ciudad. Pone como ejemplo el caso de una joven bien vestida graduada en una universidad nacional quien se encontraba sentada en un banco de la Plaza Altamira y al ser entrevistada dice no atreverse a ir a buscar su título a la oficina que se encuentra en territorio chavista por “tener miedo de ir al centro de Caracas. Ahora una siente que tiene que disfrazarse con ropas andrajosas” (pp. 1-9).

Tal como se ha señalado, estos imaginarios sociales que están reforzados por la elevada polarización política frente al gobierno del Presidente Chávez, sirven de justificación a la exclusión y a la violencia. Por tanto, la violencia, sea ésta real o percibida, produce crisis o rupturas en los planos personales, familiares y sociales y tiende a deslindar el discurso de la praxis para enfrentarla. Tal como lo señala Susana Rotker (2000), “Los individuos buscan sus propias articulaciones, repitiendo una y otra vez sus relatos personales, acaso al modo de exorcismo de una experiencia traumática, acaso al modo de explicar un panorama político y económico cuya complejidad sólo es aprehensible ahora a partir del pequeño cuento de una persona a otra...” (pág. 9). Adicionalmente, ante la percepción de la violencia, los órdenes físicos y los órdenes de significados se entremezclan y la lógica y la moral se tergiversan adquiriendo una racionalidad propia que nada tiene que ver con las categorías éticas que sustentan los individuos, la familia y el grupo social.

fue con los policías y Guardia Nacional que después de dos días de saqueo y un Toque de Queda decretado por el gobierno, salió a reprimir estas manifestaciones violentamente.

¹⁹ Si bien la percepción de la oposición acerca de los pobres es que éstos están organizados alrededor de los denominados Círculos Bolivarianos y que están armados, es preciso destacar su pluralidad y/o heterogeneidad. Quizás el único rasgo común sea su procedencia o base popular y/o vecinal ya que algunos círculos son de carácter democrático mientras que otros son autoritarios y están fuertemente controlados por sus líderes; algunos, los de carácter vecinal y local, tienden a ser pacíficos y a orientarse hacia la resolución de la problemática cotidiana de la sobrevivencia; otros propugnan la violencia y son de carácter armado.

²⁰ Lo reciente de los procesos y acontecimientos aquí descritos así como la rapidez con que ocurren y se transforman, nos llevó a utilizar material hemerográfico para describir estos imaginarios y procesos.

4. Territorialidad política y geografía de guerra : feudos y ghettos urbanos

En Caracas, las luchas por la democracia y más concretamente, por la denominada democracia participativa²¹ se han polarizado socialmente; también se han “espacializado” expresándose de forma dinámica tanto en los ámbitos privados de la residencia u hogar familiar como en los ámbitos públicos de la calle, plaza o autopista de las ciudades. Las consecuencias han sido la creación de feudos y ghettos urbanos en la ciudad que responden a las diferencias sociales y políticas, la territorialización de los conflictos políticos, la aparición de espacios altamente segregados, la pérdida de libertad para desplazarse en la ciudad dado el alto riesgo de ser identificado con el “otro”, el creciente deterioro de los servicios y calidad de vida de los ciudadanos y el surgimiento de los espacios del miedo y de la violencia. En síntesis, la pérdida del derecho a la ciudad: la exclusión, desdemocratización y descuidadización.

El territorio de Caracas no es uno sino múltiple; podría hablarse de territorios políticos²², el chavista por un lado y el de la oposición por el otro, donde la tarea de identificar la localización de las actividades urbanas es de índole no solo geográfica sino también clasista. El territorio chavista es el de las barriadas pobres localizadas en las cuatro márgenes cardinales de la ciudad como lo apuntaba el periodista Taynem Hernández (El Universal, Domingo 22 de diciembre del 2002 página 1-7) y es el espacio donde los índices de violencia urbana son mayores dada la falta de vigilancia y control policial. Su ubicación marginal se vuelve estratégica a la hora de los conflictos porque en este territorio se pueden cerrar (aislar) las murallas y puertas de acceso a la ciudad y a sus actividades tal como ocurría con las murallas de la Edad Media²³. El territorio de la oposición es fundamentalmente el de las urbanizaciones de clase media ,

El recorrido por los territorios chavistas y de la oposición²⁴ que incluye las barriadas pobres, las afluentes urbanizaciones de clase media y los espacios

²¹ La democracia participativa, término que quedó inscrito en la Constitución Bolivariana de 1999 y que sirvió de objetivo a las luchas ciudadanas que liderizaron las asociaciones de vecinos en los años setenta y ochenta, es un término sumamente amplio y ambiguo que en la actualidad es utilizado por las dos partes en conflicto como respaldo de sus luchas.

²² Hablamos de territorios en la misma medida que en Colombia se dan el territorio de la guerrilla, el del gobierno y el de los narcotraficantes entre otros.

²³ Un ejemplo de ello fue el intento del Grupo Carapaica y/o Tupamaros de cerrar la Avenida Sucre cercana a la populosa Urbanización del 23 de enero y con ello la salida hacia el puerto y el aeropuerto de la ciudad. Otro posible ejemplo fue cuando bajó la población de las barriadas populares el 11 de abril del 2002 a apoyar al Presidente destituido con motivo del golpe de Estado desatándose saqueos y una gran violencia urbana que dejó mas muertos que los eventos que condujeron al golpe. En esta oportunidad, la clase media permaneció reclusa en sus viviendas.

²⁴ El espacio o *Territorio Chavista* cubre el centro de la ciudad, muy cerca de Miraflores donde se ubican el Puente Yaguno, la “Esquina Caliente” y la Plaza Bolívar, espacios que sirven de sede cuasi-permanente a los defensores más radicales de Chávez. También cubre temporalmente La Avenida Bolívar cuando allí se instala el Mercado Popular Chavista y el Paseo Los Próceres y la Plaza Olearly cuando en éstos se realizan actos de masas políticos o recreativos como “el Gaitazo”; la Plaza Venezuela que representa el límite simbólico entre el Este y el Oeste, utilizada frecuentemente por el Alcalde del Municipio Libertador para realizar mítines y actividades festivas vinculadas con dicha alcaldía y; la calle frente al edificio sede de

públicos que ambos comparten, la observación crítica sobre la clase social de los peatones que se desplazan por las calles, plazas y avenidas de Caracas y, finalmente, el análisis de las características físicas del espacio y la naturaleza de las actividades que en estos espacios se realizan, mostrará: una ciudad sitiada, con rejas, alambrado eléctrico, casillas de vigilancia y hasta barricadas en las casas, edificaciones, calles y urbanizaciones para salvaguardar la propiedad privada de la clase media y alta; donde los ciudadanos no se identifican o apropian de los espacios públicos los cuales están deteriorados y son inseguros; donde muchos espacios públicos han sido privatizados reduciendo la ciudad del ciudadano; donde las calles y espacios de circulación peatonal han sido apropiados por los comerciantes informales no para cuidarlos sino para transformarlos al uso económico. En suma, mostrará una ciudad donde los procesos de segregación socio-espacial se han exacerbado como consecuencia de la creciente polarización social y donde los conflictos políticos se han territorializado (García-Guadilla, 1998; Rodríguez y Winchester, 2000; García y Villá, 2001)

Caracas, ciudad que en el pasado se asumía como un ejemplo de “la convivencia de los barrios marginales con las modernas urbanizaciones de clase media”, y de “una sociedad de clases sin lucha de clases”, es hoy una ciudad sitiada, dividida y polarizada socialmente y altamente segregada desde el punto de vista espacial y de desempeño de las actividades. Los espacios de convivencia social se han homogeneizado de forma polarizada y segregada dividiéndose en “espacios de los pobres y espacios de la clase media”. Esta polarización tiende a coincidir con los espacios de quienes apoyan al presidente Chávez y quienes lo adversan por lo que en Caracas se han reproducido las “áreas naturales” del Chicago de 1920, entendidas éstas como áreas territoriales homogéneas en términos socioeconómicos.

Según los escritos de la ya famosa Escuela de Chicago (Park y Burgess, 1925), a comienzos del siglo XX, en esta ciudad las pandillas juveniles se dividían el territorio y quien osara entrar en el territorio del otro era fuertemente

Petróleos de Venezuela (PDVSA) en la urbanización La Campiña que si bien fue por un tiempo un espacio de competencia entre el chavismo y la oposición, finalmente fue cerrada y apropiada por el chavismo. En contraste, los espacios o el *Territorio de la Oposición* son: la Plaza Altamira o Plaza Francia convertida en símbolo al ser declarada por los militares anti-chavistas como Plaza de La Libertad y territorio libre; la Plaza de PDVSA en Chuao, rebautizada como Plaza de La Meritocracia en honor a la huelga del personal profesional y técnico realizada un poco antes del 11 de abril de 2002. De forma temporal o menos permanente, es territorio de la oposición la Autopista del Este a la altura del distribuidor Santa Fe y la Francisco Fajardo a la altura del distribuidor Altamira; las calles de urbanizaciones de clase media tales como La Florida, El Paraíso, Cumbres de Curumo y algunas plazas y avenidas como La Plaza Candelaria y la Avenida Victoria, escenarios de fuertes cacerolazos, trancazos y otros eventos por ubicarse en la frontera entre los dos territorios.

La mayor parte del Territorio Chavista se encuentra en el Municipio Libertador (Oeste de la ciudad de Caracas y gran parte del Municipio Sucre (al Este); el Territorio de la Oposición abarca los municipios Chacao, Baruta y El Hatillo, todos ellos en el Este de la ciudad. En estos tres municipios del Este viven los residentes con mayor ingreso socioeconómico; no obstante, su tamaño poblacional es al menos diez veces menor que el del Municipio Libertador

reprimido. Sin embargo, los factores que ocasionaban estos conflictos eran fundamentalmente étnico-raciales ya que la composición socio-económica de las áreas en conflicto (fueran éstas negras, polacas o italianas) era semejante puesto que todos eran pobres. Por tanto, el conflicto entre grupos étnicos tenía que ver más con la defensa y/o apropiación de un espacio o territorio que con diferencias políticas o sociales. En contraste, el desencadenante de los conflictos espaciales en la Caracas del 2003 es fundamentalmente de carácter político; es decir, el apoyo o el rechazo al Presidente Chávez. No obstante, estas diferencias políticas tienden a vincularse con diferencias de clase social al asociarse con los estereotipos alimentados por el propio Presidente de la República quien ha equiparado la división política con división de clase, ha plasmado su definición de pueblo exclusivamente en los pobres y ha alienado a la clase media estereotipándola de “oligarca”. A pesar de las diferencias políticas y sociales, los chavistas y la oposición coinciden en la forma de plasmar estas diferencias de forma segregada en el territorio que ocupan y sobre todo en “excluir al otro” de dicho territorio. Es así como Caracas ha pasado a ser una ciudad donde se dan fuertes confrontaciones de clase: si se es pobre se tiende a ser chavista y si se tiene algo que perder (clases media y alta), se opta por la oposición política.

Al informar sobre la Marcha por la Paz realizada por los motorizados del sector popular de Catia en Caracas, el diario El Nacional del 23 de febrero del 2003 (p. A-2), destacó que ésta “...desacató la caprichosa zonificación que con base en patrones políticos se le ha hecho a la ciudad de Caracas y cuya violación puede ser penada con una golpiza o una lluvia de piedras”. Uno de los integrantes de la Coordinadora de Catia auspiciadora del evento, resaltó que los habitantes de la zona están perdiendo el miedo a pesar que “...por aquí nos tienen intimidados. Ellos (los oficialistas) consideran que este territorio es su cuna y por eso lo cuidan” (El Nacional, 23/2/2003, p. A/2). En la evaluación final de esta marcha por la paz se señala que la caravana volvió a su base sin bajas a pesar que “desafiaron la regla no escrita, a merced de la cual alguien con boina roja corre peligro en Altamira y otro con “pinta de escuálido” debe andar con sigilo en Casalta” (El Nacional, 23/2/2003, p. A/2).

Las transgresiones a los espacios del otro, pueden ocasionar no solo “heridos por golpiza o piedras” sino también “muertos”²⁵. Por ejemplo, el 11 de abril del 2002, fecha en que la oposición decidió llevar su protesta al Palacio de Miraflores o sede del Ejecutivo ubicado en el centro de la ciudad y en territorio chavista, hubo numerosos muertos. También hubo dos adeptos al chavismo muertos con motivo de los intentos de la marcha de la oposición por llegar al

²⁵Es preciso destacar que no puede emitirse ningún juicio sobre si la responsabilidad por la violencia política es de los chavistas, la oposición, la policía, la guardia nacional u otra instancia ya que no se han llevado a cabo las investigaciones judiciales pertinentes lo que hace que una parte culpabilice a la otra por los “muertos”. La Comisión de la Verdad, solicitada por la sociedad civil y avalada por organismos internacionales de Derechos Humanos con motivo de los numerosos muertos del 11 de abril del 2002 no se llegó a instalar al no conseguir la aprobación de la Asamblea Nacional, mayoritariamente adepta al Presidente Chávez, que obstaculizó tal posibilidad. A pesar de la falta de credibilidad acerca de su objetividad, la Asamblea Nacional creó su propia Comisión para investigar las muertes del 11 de abril.

emblemático Paseo de Los Próceres el día 6 de enero del 2003; un policía metropolitano murió el 23 de febrero del 2003 por traspasar la frontera de adeptos al chavismo instalados frente al edificio de la sede de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en la Urbanización La Campiña. Esta violencia contra el otro se intensifica en los espacios que han sido apropiados según las diferencias políticas (adeptos a Chávez versus oposición) frente al “desdibujado e incrementalista proyecto bolivariano” que cada día, según sea la coyuntura política, parece delinearse de una manera distinta.

Sin embargo, dentro de este territorio urbano polarizado por la violencia política, el espacio “propio” tampoco garantiza la seguridad o integridad física como lo demuestran las muertes en la Plaza Altamira ocurridas el 6 de diciembre del 2002. Por otro lado, la expresión de esta violencia en espacios segregados políticamente tiene una vinculación estrecha con la diferencias socioeconómicas por lo que la ciudad de Caracas ha tendido a polarizarse socialmente a la manera de un ghetto enfrentando, desde el punto de vista política y social, a la clase media y alta que vive predominantemente en el sector Este de la ciudad con la población pobre que tiende a vivir en el Oeste²⁶. Esta relativa coincidencia entre las diferencias políticas y sociales, estimulan los estereotipos y marcan cada vez en mayor grado el espacio urbano y las percepciones que cada uno tiene del otro delimitando de este modo los ámbitos de la ciudad donde se puede circular con relativa seguridad.

El recorrido de la cotidianidad de Caracas que se sugiere realizar, mostrará la faceta antidemocrática de los procesos socio-espaciales y políticos que están emergiendo en Caracas y que se expresan en espacios del miedo y en ciudadanías de guerra que alientan procesos de descuidadización. Si se toma en cuenta que dichos procesos se vinculan con los distintos imaginarios sociales, los cuales tal como se señaló, tienden a estar asociados con una posición de clase social, el recorrido mostrará la cara de una ciudad dividida en geografías sociales estrechamente asociadas con la defensa de los estilos de vida de cada clase social. Para evitar la violencia urbana, es preciso conocer este mapa ideológico-social y político de manera de no transpasar sus límites o fronteras.

Todavía los habitantes de Caracas, orgullosos de su caraqueñidad, otrora símbolo de modernidad frente al resto de las ciudades del país, se preguntan: ¿cómo se llegó a esta polarización social en Caracas, ciudad que si bien no tiene en su haber méritos urbanísticos sí podía jactarse de contar con una población aparentemente integrada socialmente y donde, existían las clases sociales pero no lucha de clases?, ¿una ciudad donde el conserje del edificio o el limpiabotas conversaban amigablemente con el propietario o el cliente?; ¿una ciudad donde en la mejor tradición caribeña, los habitantes de los barrios marginales coexistían, en buenos términos relativamente hablando, con los de las edificaciones de clase

²⁶ Ni la segregación espacial ni la polarización social es total ya que también existen pobres en el Este de la ciudad (caso de la Parroquia Petare en el Municipio Sucre); también existen urbanizaciones de clase media-media en el Oeste (caso de las urbanizaciones El Paraíso y Montalbán).

media e incluso con los habitantes de zonas residenciales de clase alta en cuyas casas trabajaban?; ¿una ciudad donde si bien existía segregación espacial, la segregación social generalmente consecuente en otras ciudades de América Latina sobre todo aquellas con un alto porcentaje de población indígena, estaba minimizada?.

La violencia y el miedo al otro junto con la politización de la sociedad civil y de los espacios de la ciudad donde ésta se expresa²⁷ se acentuaron en 1999, una década mas tarde del “Caracazo” incidiendo en el deterioro de la calidad de vida, movilizand o a las organizaciones sociales y plasmándose tanto en los espacios públicos como privados.

La oposición ha expresado su protesta mediante cacerolazos, pitazos y apagones de luz que realizan desde las calles o desde el espacio privado de los ya sea lujosos o humildes apartamentos que habitan en edificios residenciales de la urbanizaciones de clase media; el cambio de luces y el uso de banderas desplegadas en los vehículos, balcones y otros lugares a manera de estandartes y, mediante las innumerables marchas que este grupo social organiza en las calles, plazas, avenidas, autopistas y otras áreas públicas de la ciudad. El imaginario de las clases media y alta ha tendido a identificar a los adeptos al gobierno con los Círculos Bolivarianos²⁸. Además de movilizarse en apoyo al Presidente Chávez, estos grupos han dirigido sus protestas contra la oposición mediante el asedio a edificaciones públicas como por ejemplo los medios de comunicación de la oposición que tienen un alto valor simbólico porque construyen la opinión pública política. Los adeptos a Chávez también han asediado las oficinas administrativas de las organizaciones corporativistas que lideran el conflicto como la CTV y Fedecámaras, las oficinas de las filiales petroleras (PDVSA) y la sede de la Alcaldía Metropolitana²⁹. Mas aún, han disrumpido las actividades urbanas

²⁷ Si bien la violencia y la inseguridad urbana están estrechamente asociadas con los elevados niveles de pobreza y desigualdad, estos problemas se recrudecen como consecuencia de los procesos aquí descritos. Por otro lado, la politización de los espacios de la ciudad o el uso de los mismos para las protestas no es un fenómeno nuevo ya que desde la época de la Colonia, las plazas y calles han servido para que la gente reclame sus derechos en momentos de crisis políticas o económicas tal como ocurrió con la caída del Dictador Marcos Pérez Jiménez en 1958 o como ya se ha señalado, en el “Caracazo” de 1989. Sin embargo, el fenómeno que aquí describimos es novedoso en la intensidad, duración, dispersión y variedad de espacios que se utilizan. Los espacios quedan “marcados” o identificados políticamente y en ocasiones cambian sus usos, permanentemente o por un tiempo relativamente largo como en el caso de Puente Llaguno, sede de los grupos organizados chavistas o en La Plaza Altamira, sede de los militares opositores a Chávez. Se enfatiza el caso de Caracas por ser la expresión más intensa de este proceso pero los mismos procesos están presentes en otras ciudades grandes de Venezuela tales como Maracaibo, Valencia o Barquisimeto.

²⁸ Es preciso destacar que no todos los adeptos forman parte de los Círculos Bolivarianos a pesar que los medios de comunicación privados, mayoritariamente en manos de la oposición, así los han estereotipado. De hecho, estos medios han estereotipado a la oposición con la sociedad civil y a los adeptos al gobierno con los círculos. También debe mencionarse que entre los adeptos a Chávez existe un grupo de la clase media que se autodenomina “clase media en positivo” en un intento por diferenciarse no solo de la clase media de la oposición sino también de los círculos bolivarianos y de los “chavistas” como estereotipos, en general.

²⁹ El alcalde metropolitano, Peña, quien es un fuerte opositor a Chávez aún cuando salió elegido en las listas del partido Movimiento Quinta República (MVR), partido creado por el propio Presidente, tiene sus

mediante mítines y movilizaciones de calle semejantes a las de la oposición y en el caso del gobierno, han interferido la dinámica de la ciudad instalando grandes mercados populares en las principales vías públicas como en el caso del bulevar José María Vargas en pleno corazón de Caracas y los “gaitazos” o las fiestas populares organizadas por el gobierno en los bulevares o plazas públicas para apoyar al régimen³⁰.

Como consecuencia de la espacialización en la ciudad de Caracas³¹ de las expresiones políticas a favor o en contra del Presidente Chávez, la función de la calle, la plaza o la autopista se ha transformado e incluso, la identidad de muchos de estos espacios ha cambiado de forma permanente. Tal como lo señala Tulio Hernández en su columna dominical de El Nacional (9/3/2003):

“Que la plaza Bolívar, ese símbolo de la centralidad urbana, heredado del esquema original de la ciudad ibérica, haya sido convertida en la sede operativa de un grupo de violentos oficialistas, con el aplauso del propio alcalde del Municipio Libertador, y en zona vedada para los opositores, lo menos que puede considerarse es una triste y atrasada aberración.

Igual ocurre con el territorio tomado en La Campiña. Allí, con el pretexto de tener instalada una zona de seguridad (de nuevo la gramática de guerra) para defender PDVSA de sus enemigos escuálidos, opera día y noche un ruidoso templete chavista que cuenta con el aditivo de una carpa convertida en burdel a precios regulados, la cual tiene sometida a la más profunda indignación y molestia a los vecinos de la zona.

Lo mismo vale para la plaza Altamira. El que en otros tiempos fuera uno de los pocos lugares de generoso espaciamiento con los que cuenta esa zona caraqueña ha quedado convertido en territorio militar de oposición, en cuartel al aire libre, en casa de partido con paredes, en urbanidad secuestrada para sólo un grupo de los ciudadanos que usan la ciudad. Porque allí, como ocurre en la

oficinas en la plaza Bolívar al igual que el alcalde Bernal, del Municipio Libertador. Desde el punto de vista jurídico, ambos comparten el mismo espacio existiendo un solapamiento de competencias que ha llevado a fuertes enfrentamientos y a que grupos adeptos al alcalde Bernal, asedien constantemente Alcaldía Metropolitana impidiendo que ésta cumpla con las labores administrativas de gobierno. Si a ello se suma la falta de transferencia del presupuesto que le corresponde a la Alcaldía Metropolitana por parte del Ejecutivo, quien no ha respetado la normativa de descentralización vigente, el resultado es un alto nivel de ingobernabilidad.

³⁰ La polarización ha llegado incluso a los planos sobrenaturales tal como se desprende de la página de Política del diario El Nacional (23 /2/2003). Al comentar la Misa al aire libre convocada por la Coordinadora Democrática de la oposición en la Autopista de Prados del Este el día 15 /2/2003 y las declaraciones que diera ese mismo día el Presidente Chávez en su programa dominical “Aló Presidente” donde denunciaba las artimañas de hechicería de la oposición para desalojarlo del poder, Tulio Hernández destaca que “...mientras que el presidente Hugo Chávez denunció el hallazgo de animales muertos en las cercanías de Miraflores, la oposición marchó, castigada por el sol, con las advocaciones de la Virgen María. Gobierno y Coordinadora Democrática se han apoderado de las imágenes sagradas para justificar su proyecto de país”. (El Nacional 9/3/2003. p. A/13)

³¹ Por ser Caracas un valle estrecho altamente densificado en población, el patrón de ocupación del espacio tiene un alto impacto en la calidad de vida del ciudadano.

plaza Bolívar o en los alrededores de La Campiña, los demás y las opciones personales han quedado vedados. Ya no pueden ir las parejas a compartir tranquilas, ni los niños a jugar o los ancianos a conversar, como antes. Hoy sólo se va a hacer política y sólo si se es de ese tipo particular de oposición que celebra y persigue la salida militar” (A/13).

Acciones como el cerramiento de las calles y autopistas denominados “trancazos”³² o las frecuentes y masivas concentraciones y marchas que impiden también la circulación vehicular se han vuelto cada vez más frecuentes. De este modo, la calle ya no sirve solamente para la convivencia ciudadana y para que circulen los peatones en su ruta hacia las actividades cotidianas pues está ocupada en días laborales por los comerciantes ambulantes o buhoneros que han crecido prodigiosamente a la luz de la crisis económica o por las personas que se movilizan para “manifestar o marchar”. La autopista ya no sirve sólo para que circulen los vehículos³³ sino que puede estar cerrada para el tránsito vehicular por la multitud de gente que acude a marchar, a favor o en contra del régimen, por los “trancazos” de la vía hechos por la oposición, por los mercados populares o por las expresiones recreativas e incluso religiosas que se instalan en ocasiones especiales que así lo decida el gobierno o la oposición³⁴.

A pesar que Caracas es a ciudad donde las tensiones democracia-antidemocracia y/o ciudadanización-desciudadanización se encuentran más exacerbados, estas dos facetas también se expresan en algunas de las ciudades del interior del país; sobre todo en los lugares de producción petrolera, principal actividad económica de Venezuela. La espacialización de los conflictos trasciende el espacio urbano y se expresa a nivel del sistema de ciudades siendo las de mayor tamaño las que tienen los mayores conflictos; también se expresa a nivel de las regiones donde se encuentran instaladas las industrias básicas del Estado tales como petróleo y aluminio, las cuales son las más conflictivas.

³²La práctica del “trancazo” o el levantamiento de barreras u obstáculos para impedir la circulación de los vehículos en calles, avenidas y autopistas seleccionadas y de acuerdo con determinados horarios, (incluso dentro de la propia urbanización) fue llevada a cabo durante el denominado “paro cívico” de la oposición de los meses de diciembre 2002 y enero 2003 y generó gran tensión y un alto rechazo entre los vecinos de las urbanizaciones de clase media que eran los más afectados por la medida, al afectarse o “trancarse” unos a otros. La medida que cercenaba el derecho constitucional a transitar libremente por las calles, avenidas o autopistas de la ciudad fue suspendida cuando una encuesta de los medios de comunicación destacó su alta impopularidad.

³³Es de hacer notar que el caraqueño no puede desprenderse de su vehículo como parte de la cultura urbana de clase media a lo que contribuye el hecho que la expansión de la ciudad de Caracas y sobre todo, la construcción de las modernas y periféricas urbanizaciones de la clase media, no ha tomado en cuenta al peatón y que el sistema de transporte público es altamente deficitario.

³⁴Un ejemplo de expresión recreativa que cercena el derecho al libre tránsito a pesar de que su objetivo era el intercambio o entendimiento entre los dos grupos en conflicto, fue el juego de pelota entre chavistas y oposición en plena autopista de Prados del Este a la altura de la urbanización Santa Fé y el barrio el Guire; otro ejemplo, en este caso de expresión religiosa, fue la misa a la Virgen que se realizó en la misma autopista el domingo 2003.

Tal como lo señala, Antonio Cova Maduro (El Universal, Domingo 22 de diciembre del 2002, pág. 1-8) con motivo del paro petrolero que respaldó al paro cívico nacional:

“Por ser una acción que forma parte de una movilización política, el paro petrolero no puede ser desligado de ella. Se nutren recíprocamente. Es ello lo que ha hecho que zonas hasta ahora aparentemente marginales a la agitación, como la costa oriental del Lago de Maracaibo, la península de Paraguaná y los estados Anzoátegui y Monagas sean, con Caracas, los grandes motores de la resistencia a Hugo Chavez” (pp. 1-8).

En lo que se refiere a la defensa de su estilo de vida (tradúzcase, intereses de clase), Cova Maduro señala:

“Para que eso sea posible (que se ensamblen adecuadamente el vasto conjunto de operaciones y programas de la red petrolera) es vital que se cumpla con el mantenimiento y cuidado de la sutil *red informal* en la que deviene cualquier organización con el correr de los años. Las ciudades-petróleo como Cabimas, Lagunillas, Anaco y San Tomé refuerzan esa tendencia hasta unos niveles increíbles . Atacarles su modo de trabajo es agredirles brutalmente su modo de vida”. ” (El Universal Domingo 22 de diciembre del 2002, pág. 1-8).

Otra de las expresiones antidemocráticas de la territorialización de los conflictos lo constituyen las movilizaciones cívicas o marchas dentro de espacios que excluyen al “otro”. La existencia de estos espacios políticos o de conflicto aumenta la probabilidad que en ellos se ejerza la violencia en caso que el “otro” intente traspasarlos. Cada grupo, sea a favor o en contra de Chávez, tiene sus hitos y sus recorridos bien marcados no permitiendo que “el otro” se desplace en estos espacios: cuando uno de estos grupos intenta entrar en el territorio del otro ocurren fuertes enfrentamientos incluso físicos. Los espacios marcados por estas expresiones socio-políticas dentro de la elevada polarización social e ideológica existente tienden a desdibujar su función urbana original, sino de forma permanente al menos en los momentos en que el conflicto político se activa y se instala en ellos: las autopistas no sirven para que circulen los vehículos en ruta a las actividades cotidianas sino para realizar manifestaciones multitudinarias, hacer vigiliadas (con tienda de campaña y los enseres de un moderno camping) o albergar a las miles de personas en ruta a apoyar o rechazar el régimen; las plazas tampoco sirven para el descanso y la recreación pasiva sino para expresar el apoyo o el rechazo político al Presidente. Los jóvenes de la clase media que en el pasado siguieron los hábitos norteamericanos de recreación son los primeros en reforzar esta nueva sub-cultura que incluye no sólo las marchas sino también la vestimenta que se utiliza para asistir a la misma con colores de la bandera nacional, la música del folclore nacional que las anima y los símbolos y parcartas de sabor nacionalista. El incremento de las relaciones sociales cara a cara y el

surgimiento de un espíritu de solidaridad entre iguales socialmente son también parte de esta sub-cultura de las marchas³⁵.

Esta subcultura “patriótica y nacionalista” que ha emergido recientemente en la clase media opositora también difiere de la de la clase pobre en lo que se refiere a la apropiación de los hitos y símbolos espaciales urbanos tradicionales y modernos. En una sociedad fuertemente dividida en clases sociales, los símbolos patrios tradicionales como La Plaza Bolívar en el centro de la ciudad, el Panteón Nacional donde reposan los restos del Libertador Simón Bolívar, el Palacio Presidencial de Miraflores, la Asamblea Nacional y el Paseo Los Próceres entre otros han sido apropiados por el sector que apoya al gobierno. Este territorio que no le pertenece “a la clase media” según los chavistas tiene un elevado valor simbólico y patriótico; dentro del imaginario quizás no consciente de los adeptos a Chávez se encuentra la idea que “sólo los chavistas son los dueños de esos símbolos”. También se enfrentan lo tradicional y lo moderno dentro de estos espacios simbólicos ya que la Plaza Altamira, las autopistas Francisco Fajardo y Prados del Este y los espacios públicos contiguos a las grandes edificaciones como la sede de PDVSA en Chuao que son los espacios de protesta de la clase media y alta, representan los símbolos de la moderna cultura petrolera.

5. ¿Desciudadanización de las asociaciones de ciudadanos? : Planes Comunitarios de Defensa Activa del 23 de enero del 2003

Dentro del proceso de segregación espacial y polarización social causado por las diferencias políticas se observa la transformación de las organizaciones de vecinos y ciudadanos que durante los ochenta lucharon por la profundización de la democracia y la participación en asuntos locales (Santana, 1988; Gómez Calcaño, 1987; Garrido y Ramos, 1994; Ramos, 1995) en comunidades pseudo-militarizadas de defensa e incluso armadas para “protegerse del otro”, el enemigo. Un ejemplo de ello lo constituyen los planes de contingencia o de guerra que se prepararon con motivo del 23 de enero del 2003. Dichos planes fueron una consecuencia del rumor de que “las hordas chavistas y los círculos bolivarianos” supuestamente invadirían las residencias de la clase media y alta el 23 de enero en pleno paro cívico, el cual casi duraba dos meses.

³⁵ Al igual que en la guerra de los Gisteros en México, las marchas van acompañadas de los comerciantes ambulantes o buhoneros que venden todo tipo de símbolos patrios (banderas, sombreros y vestimentas con los colores de la bandera nacional) requeridos para asumir el rol de oposición y alimentar esta subcultura. Estos comerciantes informales también satisfacen todo tipo de necesidades alimenticias llegando al límite durante el paro cívico decembrino de acompañar las marchas con grandes ollas para calentar la tradicional “hallaca navideña”. Los buhoneros no son percibidos como “iguales” sino como “el otro” con quien se establece una relación desigual de vendedor-consumidor. En momentos en que se desata la violencia, los buhoneros pueden ser tildados de sospechosos y en algunos casos como en los eventos de la Plaza Altamira ocurrido el día de 2003, uno de los buhoneros que regularmente venden en ella fue casi linchado por la oposición a pesar de su inocencia debido a los estereotipos de clase.

Algunos de los militares retirados que intentaron liderizar la oposición a Chávez³⁶ sembraron fuertes rumores que retumbaron en los espacios privados u hogares de la oposición sobre la invasión que supuestamente los Círculos Bolivarianos Chavistas realizarían al sagrado recinto de las residencias de la clase media. La hora cero sería el día 23 de enero del 2003, fecha en que se conmemora el inicio de la democracia o la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez en 1958. Los diagnósticos o partes de guerra presentados por algunos de estos militares de la oposición indicaban que ese día habría una terrible violencia de parte de los círculos bolivarianos y que la única forma de contrarrestarla sería con tácticas de guerra. Como parte de esta estrategia, un grupo de militares retirados muchos de los cuales estaban vinculados laboralmente con empresas de seguridad, se alió con los representantes de las comunidades de vecinos de clase media y diseñaron el “Plan Comunitario Defensa Activa” (www.segured.com) el cual fue distribuido por losvecinosobservan@hotmail.com para ser aplicado en las residencias particulares, edificaciones y urbanizaciones de clase media. En la “Introducción (Versión Terrorismo)” (p. 3) del documento se destaca su objetivo:

“ Este es un material desarrollado por un grupo de vecinos *con el consenso y participación de comunidades amigas y especialistas en el área de seguridad comunitaria*, con la finalidad de establecer lineamientos operativos que nos permitan aumentar la efectividad de respuesta al enfrentar situaciones de emergencia que pudieran presentarse en nuestras viviendas, institutos escolares o trabajos” (p.3) (resaltado nuestro)

Los planes que eran muy semejantes entre sí incluían el uso de las armas “por si acaso”, pues es preciso destacar que en los últimos meses, no sólo los círculos bolivarianos parecen haberse armado sino que también lo ha hecho la clase media³⁷. En palabras de uno de los entrevistados de la oposición, la diferencia es “que la clase media se ha armado para defender los sagrados derechos a la propiedad, familia y libertad” mientras que los chavistas lo hacen para atacar dichos derechos”. La versión desde los adeptos a Chávez es que ellos “no estan armados” y que también “defienden sus derechos”. Estos planes de defensa, más adecuados para fortificaciones sitiadas al mejor estilo de la Edad Media que para modernas edificaciones urbanas, incluían el uso de armas, el

³⁶ Entre estos militares se encontraba por ejemplo el Almirante Carratú Molina quien en el Polideportivo de la emblemática urbanización Santa Fe, de clase media, contribuyó a alimentar los rumores y a instruir sobre el Plan.

³⁷ Los planes de contingencia contemplaban varios niveles: la edificación o el condominio, la urbanización y el sector mas amplio de urbanizaciones. Por lo general incluían: un plan de comunicación y alertas de diferente tipo a través de radios, pitos, sirenas , teléfonos celulares, ruidos etc; un plan para “levantar el puente”, es decir, obstruir el acceso a la edificación y/o urbanización mediante barricadas de hierro o atravesando camionetas o carros como obstáculos; un plan para el cerramiento interno de las puertas de los edificio y de acceso a las escaleras incluyendo la inmovilización del ascensor en los pisos superiores; un plan de ataque al invasor a través del derramamiento de agua o aceite caliente y, , en caso que todo fallara , el plan contemplaba que las mujeres, los ancianos y los niños se retirarían a espacios resguardados y los hombres utilizarían las armas (García-Guadilla, 2003: Testimonios recogidos por la autora entre cuarenta participantes en estos planes de diferentes urbanizaciones)

cerramiento con candados internos de las rejas y puertas de los edificios, el derramamiento de barriles de aceite y de agua caliente sobre el agresor, la construcción de barricadas y la elaboración de bombas molotov entre otras cosas. En el mismo se destaca textualmente: :

“ (se) ..puede implementar el uso de aceite, gasolina, cadenas, clavos o barreras con carros, camiones o autobuses, barriles, materos, desperdicios, botellas quebradas, destapar las tapas del drenaje y alcantarillas, para evitar o retrasar el acceso a la zona” (p.16)

El Plan de Defensa Activa también implicaba la vigilancia nocturna y por turnos de los propios residentes pues en la mayoría de los casos no se confiaba ni en el servicio doméstico ni en los vigilantes privados quienes pertenecen a la clase pobre y normalmente custodian la entrada de las edificaciones³⁸. A este respecto el Plan Comunitario de Defensa Activa señalaba:

” No sea tan confiado con los empleados domésticos específicamente los que vienen por días. Recuerde que muchas de estas personas han sido manipuladas y algunas nos comienzan a ver como enemigos. Esto es un asunto delicado y no hay por qué generalizar...pero debe estar alerta ante cualquier evidencia” (p. 17).

Dicho Plan recomendaba “estar preparado para cualquier contingencia que pueda ocurrir” (p.1), la activación de un sistema de alertas que iba del verde al rojo, de un sistema de comunicación altamente sofisticado para comunicarse con las policías locales, con los medios de comunicación y con los vecinos. La mayoría de las urbanizaciones reforzaron el número de vigilantes (paradójicamente pertenecientes a la clase pobre), se construyeron barricadas y se estuvo alerta durante toda la noche. Nada ocurrió pero las amas de casa, los niños y la población de clase media en general, percibieron que el pobre era el “enemigo” mientras que el pobre percibió que el oligarca, la clase media o los “escuálidos” como los llamó el presidente Chávez, eran el enemigo.

La Alianza Cívica de la Sociedad Civil conformada por las organizaciones ciudadanas *Queremos Elegir*, *Nulidad 1011* y *Ciudadanía Activa*, emitió un documento con recomendaciones sobre provisiones básicas en cada hogar vinculadas con alimentos, agua, energía, salud, documentos y dinero en caso de una “*Perturbación Natural o Social*” . cuya complejidad fue clasificada en cinco niveles o escenarios: Comoción Social, Intervención Militar, Sin Garantías,

³⁸ Al igual que con los servicios domésticos y los comerciantes informales, el vigilante tiende a ser considerado en el imaginario de la clase media y alta como “el otro”; no como un igual debido a su condición de clase. La expectativa de la clase media que normalmente contrata a los vigilantes privados para custodiar sus residencias era que en caso de ocurrir tal invasión, éstos saldrían corriendo en lugar de permanecer para defender las propiedades de “otros”. En algunos casos, incluso, se les asoció con el enemigo por ser pobres y se les tildó de “chavistas”.

Circunstancias Extremas y El Colmo. En el documento se señala que los escenarios previsibles eran el de *Perturbación Natural (N)* producto de un fenómeno natural para el cual había que estar preparado y el de *Conmoción Social (S1)* que se refiere a la existencia de “disturbios masivos o situación de emergencia general. Incluye movilización o confrontación militar, pero en principio no tiene a organizaciones como la nuestra señaladas” (p. 2). El “estar preparados para lo peor” (p.4) significaba tomar provisiones básicas en cada hogar en lo referente a “contar con reservas de alimentos y productos para largos periodos sin abastecimiento”, energía, cocina e iluminación, salud y primeros auxilios, documentos y dinero. En lo que concierne al uso de “armas para la defensa “ se señala textualmente lo siguiente:

“Nunca se sabe cuando algún tipo de arma puede servir para la defensa del hogar. Bates, trozos de cabilla, machetes o cuchillos de gran tamaño y hasta armas de fuego pueden ser útiles , siempre que se sepa utilizarlas y se tenga la decisión e hacerlo en defensa propia, que no se vaya a dudar en el momento clave y que se conozcan los riesgos legales de su uso” (p.6)

6. Construyendo ciudadanía plural; algunas consideraciones finales

En los años noventa, la grave crisis política y económica junto con la cooptación por parte de los desprestigiados partidos políticos del movimiento ciudadano de clase media que por casi dos décadas liderizó las movilizaciones a favor de la democracia participativa, contribuyeron a vaciar el espacio desde el cual construir las ciudadanía diferenciadas, complejas y plurales que requiere la democracia participativa.

Una vez electo el Presidente Chávez en 1998 y aprobada la Carta Magna donde se sancionó la democracia participativa y se incluyeron las demandas y derechos de las organizaciones sociales previamente excluidas, las organizaciones sociales tendieron a politizarse y diferenciarse ideológicamente en organizaciones a favor del proyecto bolivariano de Chávez y organizaciones en contra de tal proyecto. Adicionalmente, las organizaciones de la oposición parecen haber encarnado en el Presidente Chávez las causas de la crisis . A todo ello debe sumarse la crisis de ciudadanía que ha dificultado la delimitación entre los espacios público y privado, los intereses particulares y colectivos y los ámbitos de lo político y lo social.

Por otro lado, el vacío dejado por la falta de actores sociales autónomos y por el desprestigio de los partidos o actores políticos tradicionales ha llevado a transgresiones en el rol que le corresponde desempeñar a cada uno de los actores para salir de la profunda crisis. Con frecuencia, los actores o partidos políticos se disfrazan de organizaciones no gubernamentales o fundaciones y las organizaciones sociales usurpan, aunque sea momentáneamente, el papel de los

partidos políticos. Dentro de esta confusión de roles, los actores económicos y los gremios sindicales como Fedecámaras y la CTV liderizaron un paro cívico de dos meses cuyos objetivos no eran económicos ni salariales, sino políticos y cuyas consecuencias negativas han trascendido mas allá de sus gremios corporativos.

Estas transgresiones se ven facilitadas por la no existencia de un proyecto socio-político claro que además de delimitar claramente los roles que le corresponden a cada actor, sirva de nexo integrador para una posible transición en caso que las estrategias de sacar a Chávez por vías constitucionales tuvieran éxito.

El vacío existente ha llevado también a las organizaciones sociales de la oposición a dirigir la mirada salvadora hacia el actor militar lo cual ha estimulando alianzas cívico-militares de carácter no democrático tales como la descrita a propósito de los planes de defensa del 23 de enero del 2003. Dicha experiencia lleva a preguntarse sobre el potencial democratizador de aquellas organizaciones sociales cuyas concepciones de democracia priorizan la defensa de los valores de la propiedad y la libertad por encima de la equidad social frente a una concepción del Estado que prioriza la equidad social y la distribución de la riqueza. El interrogante que se desprende del dilema anterior es si estas organizaciones serán capaces de desplegar estrategias no democráticas para hacer valer sus valores e intereses de clase.

El hecho que las “comunidades” de vecinos: 1) se asociaran con el sector militar opositor a Chávez para elaborar sus planes de defensa, 2) renunciaran a su autonomía como actor social al incorporarse a las decisiones que tomara la Coordinadora Democrática liderizada por instancias corporativistas tales como la CTV (acusada de corrupta) y Fedecámaras, 3) se organizaran en milicias para defender sus intereses particulares y de clase y, 3) avalaran la violencia como estrategia para la defensa de tales intereses; todo ello en nombre del derecho a “la desobediencia civil” que sancionó la Constitución Nacional en el artículo 350 y, sobre todo, en nombre de la democracia que decían defender, lleva a cuestionar la existencia de una cultura ciudadana y de un movimiento social urbano tal como se planteó durante los años ochenta y noventa . Lleva también a interrogarse acerca de si es posible la existencia de un movimiento ciudadano autónomo que traspase las barreras de clase social (García-Guadilla y González, 2000a) en ausencia de una cultura cívica y en presencia de grandes desigualdades sociales y polarización política.

Por tanto, el interrogante clave es si se puede avanzar la democracia en situaciones de baja institucionalidad, déficit de cultura política democrática, elevada desigualdad, polarización de clase y transgresión de roles entre los actores económicos y sociales. Diversos factores dificultan la resolución de la crisis en Venezuela de una manera democrática e interfieren en la posibilidad de reconstruir la ciudadanía sobre una base pluralista de reconocimiento del otro y de respeto a las diferencias políticas y a las distintas identidades de clase. Un primer factor es la falta de institucionalidad que se viene arrastrando como

consecuencia: a) del desmantelamiento de las viejas instituciones que soportaban la Constitución de 1961, b) de la falta de consenso para reconstruir democráticamente las instituciones que den soporte a la Constitución de 1999, c) de la carencia, la cual es anterior a Chávez, de una cultura política democrática que coadyuve en la resolución de los conflictos y, d) de la existencia de una alta polarización de clases sociales que conlleva diferentes visiones sobre tal institucionalidad.

Otros factores a destacar es la falta de organización política o, tal como lo señaló Tulio Hernández en El Nacional (23/2/2003), la carencia de una organización “para la política” a pesar de la intensa movilización popular de los dos últimos años³⁹. El esfuerzo de la oposición mediática e incluso de la Coordinadora Democrática ha sido en movilizar a la gente, no en organizarla. Ello se debe quizás a la falta de un proyecto alternativo e incluyente de ciudadanía capaz de nuclear no solo a la oposición sino también a los adeptos a Chávez. La Constitución Bolivariana de 1999 a la cual se llegó mediante un Proceso Constituyente, constituye uno de esos proyectos aun cuando paradójicamente ha sido utilizada para legitimar las acciones de exclusión y las protestas de las dos partes en conflicto.

Otro aspecto importante que incide negativamente en la resolución de la crisis y que deriva del paro cívico llevado a cabo por la oposición es la distorsión de las identidades de los actores económico y social y del rol que cada uno debía desempeñar para enfrentar tal crisis. La alianza de los actores económicos (Fedecámaras y la CTV) y sociales con los partidos políticos desdibujó y dejó desprotegido el núcleo de los intereses e identidades de los actores económicos y sociales que fueron quizás quienes mayor legitimidad perdieron en este confuso, vertical y personalista proceso de toma de decisiones⁴⁰.

³⁹ Asumimos el 10 de diciembre del 2001 como la acentuación de los procesos aquí descritos por ser la fecha en que se dio la primera gran manifestación de la oposición en Caracas y el día en que la clase media empezó a tomar la calle o a “marchar” para expresar su descontento.

⁴⁰ Para nadie es un secreto que muchas de las decisiones expresadas frente a los medios de comunicación por el líder sindical de la CTV, Carlos Ortega, incluyendo la decisión de ir al paro cívico en diciembre, no contaban con el aval de las organizaciones sociales

Referencias bibliográficas

De Certeau, Michel (1984). *The Practice of Everyday Life*, University of California Press, Berkeley, Los Angeles-Londres.

Ellner, Steve (1999). "Obstáculos a la consolidación del movimiento vecinal venezolano: la brecha entre lo nacional y lo local". *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, Vol. 5, No. 1. pp.33-57.

García-Guadilla, María Pilar (1991). "Crisis, actores y conflictos sociopolíticos en la Venezuela Post-Saudita" en *Revista Argos*, No. 14. Caracas, USB.

García-Guadilla, María Pilar (1994). "Configuración espacial y movimientos ciudadanos: Caracas en Cuatro tiempos". Tomás R. Villasante (coord.). *Las ciudades hablan*. Editorial Nueva Sociedad.

García-Guadilla, María Pilar y Ernesto Roa (1996) "Gobernabilidad, cambio político y sociedad civil: el proceso constituyente en Venezuela ". *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, vol. 2, Nos. 2-3. Caracas UCV.

García-Guadilla, María Pilar y Ernesto Roa (1997). "La red de organizaciones sociales liberales y la democracia en Venezuela" en *Revista Cuadernos del Cendes* . Año 14, No. 35, pp.55-80

García-Guadilla, María Pilar (1998). "Ajuste económico, desdemocratización y procesos de privatización de los espacios públicos en Venezuela". *Revista Interamericana de Planificación*. Vol. XXX, Nos. 119 y 120, pp. 77-89.

García-Guadilla, María Pilar y Nadeska Silva (1999). "De los movimientos sociales a las redes organizacionales en Venezuela: estrategias, valores e identidades" en *Revista Politeia*, No. 23 pp.7-28

García-Guadilla, María Pilar y Mónica Hurtado (2000). Participation and Constitution Making in Colombia and Venezuela: Enlarging the Scope of Democracy?. *Lasa papers*. XXII International Congress of the Latin American Studies Association. Miami.

García-Guadilla, María Pilar y Rosa Amelia González (2000a). "Formulación participativa del presupuesto del Municipio Caroní: comparación con la experiencia de Porto Alegre". *América Latina Hoy, Revista de Ciencias Sociales* . No. 24. Instituto de Estudios de Iberoamérica y Portugal.pp. 5-17.

García-Guadilla, María Pilar (2001). "El movimiento ambientalista y la constitucionalización de nuevas racionalidades: dilemas y desafíos". *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*. Vol. 7, No. 1 pp. 113-132.

García-Guadilla, María Pilar (2002). "Actores, organizaciones y movimientos sociales en la Venezuela del 2002" en Marisa Ramos R (Ed.) *Venezuela: rupturas y continuidades del sistema político (1999-2001)*. Ediciones Universidad de Salamanca. España.

García-Guadilla, María Pilar (2002^a). "Democracy, Decentralization and Clientelism: New Relationships and Old Practices" en *Latin American Perspectives*. Vol. 29, No. 5.

García-Guadilla, María Pilar (2002b). "Democracy , Decentralization, and Clientelism: New Relationships and Old Practices". *Latin American Perspectives*. Issue 126, Vol.29 No. 5,pp. 90-109

García-Guadilla, María Pilar (2002c). "Civil Society: Institutionalization, Fragmentation, Autonomy". Steve Ellner and Daniel Hellinger (Editors), *Venezuelan Politics in the Chávez Era: Globalization, Social Polarization, and Political Change*. Lynne Rienner Publishing, USA. Chaper 10

García , Pedro José y Marc Villá (2001). "De la sociabilidad vigilante a la urbanisda privativa". Revista *Perfiles Latinoamericanos*, Año 10, No. 19, pp. 57-82

Garrido, Francisco Javier y Marisa Ramos (1994). "Tejido asociativo y organización comunitaria en Caracas". Tomás R. Villasante (coord.). *Las ciudades hablan*. Editorial Nueva Sociedad.

Gómez Calcaño, Luis (1987) . *Crisis y movimientos sociales en Venezuela*. Edit. Tropicos. Caracas.

Gómez Calcaño, Luis (1997). Nuevos actores y viejas prácticas: asociaciones de vecinos y partidos políticos. 49 Congreso Mundial de Americanistas, Quito.

Hernández, Taynem (2002). El Universal, Domingo 22 de diciembre, p.1-7.

Kliksberg, Bernardo (2002). "América Latina: Una región en riesgo. Pobreza e inequidad". *Revista de Ciencias Sociales (RCS)*. Vol. VIII, No. 1. Faces-LUZ, pp. 9-22.

Lander, Edgardo (1995). "movimeintos sociales urbanos, sociedad civil y nuevas formas de ciudadanía". Edgardo Lander (ed.), *Neoliberalismo, sociedad civil y democracia: Ensayos sobre América Latina y Venezuela*. Universidad Central de Venezuela.

Naim, Moisés y Ramón Piñango(1984). *El caso Venezuela: una ilusión de armonía*. IESA, Caracas.

Park, Robert y Ernest Burgess (1925). *The city*. University of Chicago Press.

Ramos, Marisa (1995). *De las protestas a las propuestas: identidad, acción y relevancia política del movimiento vicinal en Venezuela*. Editorial Nueva Sociedad. Caracas.

Rey, Juan Carlos (1989). *El futuro de la democracia en Venezuela*, Serie Estudios, Colección Idea, Caracas.

Rodríguez, Alfredo y Lucy Winchester (1998). *Ciudades y gobernabilidad en América Latina*. Colección Estudios urbanos, Ediciones Sur. Chile

Rotker, Susana (2000). *Ciudadanía del miedo*. Rutgers-Nueva Sociedad. Caracas.

Santana, Elías (1988). "La política de los vecinos: experiencias del Movimiento Comunitario como fuerza democrática y de cambio frente a la crisis" en, *El Venezolano ante la crisis*. Ediciones Amón C.A. Instituto IDEA. Caracas. 99). *Democracia, descentralización y concepciones de ciudadanía en Venezuela*. Manuscrito Tesis de Maestría. Caracas, Universidad Simón Bolívar.

Web Vidal, Andy (2002). El Universal, Domingo 22 de diciembre pp. 1-9,

www.geocities.com/caciv_ve/

www.elnacional.com